



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, Diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2019-00651-00
EJECUTANTE:	AGUAS DE BUGA S.A E.S.P. notificacionjudicial@aguasdebuga.com abq.andresvelasquez92@gmail.com
EJECUTADO:	FABIO HUMBERTO ARANGO OSORIO (no tiene dirección electrónica)
ASUNTO	NO LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO

I. OBJETO DE LA DECISION

Decide el Despacho si existe mérito para librar mandamiento de pago en contra de FABIO HUMBERTO ARANGO OSORIO, en virtud de la demanda ejecutiva presentada por el señor GUSTAVO JARAMILLO GONZALEZ en calidad de representante legal de la empresa AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., quien actúa través de apoderado judicial debidamente constituido.

Procede el Despacho a verificar si el caso *sub examine* se cumplen los requisitos para librar mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

La obligación que se pretende recaudar se sustenta en la sentencia del 21 de mayo de 2010 proferida por esta Corporación, modificada parcialmente por la sentencia del 21 de noviembre de 2017¹, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en la cual se decidió:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del veintiuno (21) de mayo de dos mil diez (2010), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

“1.1 CONDENAR a la sociedad Agus de Buga S.A. E.S.P. al pago de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, como titular de la obligación jurídica de velar por el cumplimiento de las normas de preventivas de señalización vial, definidas en la resolución No. 001937 del treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), en las obras ejecutadas en el marco del contrato de obra numero G-062-2003, celebrado con el ingeniero Fabio Humberto Arango Osorio.

1.2 CONDENAR al ingeniero Fabio Humberto Arango Osorio a restituir a agua de Buga S.A. E.S.P. el pago de sesenta por ciento (60%) de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, como titular de la obligación jurídica contractual de colocar las señales preventivas de tránsito, en las obras ejecutadas en el marco del contrato de obra número G-062-2003, conforme a los establecido en la resolución No. 001937 del treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

¹ Ver folios 23 a 58.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del veintiuno (21) de mayo de dos mil diez (2010), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

2. Como consecuencia de la anterior declaración, **CONDENAR** a Aguas de Buga S.A. E.S.P. a pagar a los demandantes, como indemnización de perjuicios los siguientes valores:

2.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

- a) A la señora Claudia Alexandra Varela Castro, la suma de doscientos seis millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos cuatro pesos con dieciséis centavos (\$206'835.504,16).
- b) A Karen Dayana Mesa Varela, la suma de setenta y ocho millones setecientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos (\$78.772.953,34).
- c) Al señor José Benjamín Mesa Tobón, la suma de doscientos seis millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos cuatro pesos con dieciséis centavos (\$206'835.504,16).

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.

CUARTO: Sin costas en esta instancia. (...)”.

La decisión anterior quedó debidamente ejecutoriada el 12 de enero de 2018, tal como quedó en la constancia expedida por dicha Corporación, visible a folio 58 del expediente.

III. CONSIDERACIONES

3.1 COMPETENCIA

Si bien es cierto el numeral 7 del artículo 152 del CPACA atribuye la competencia de la Corporación para conocer de procesos ejecutivos, en principio en razón de la cuantía, la Sala acoge el criterio de conexidad expuesto en providencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del Consejero William Hernández Gómez dentro el expediente A.I. 0-001-16 y asume el presente asunto en PRIMERA INSTANCIA por cuanto ésta Sala profirió la sentencia objeto de ejecución.

3.2 DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA² establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a

² Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.



una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato - que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual - o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP³ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

En el presente asunto, la parte ejecutante presenta solicitud de proceso ejecutivo autónomo aportando copia de la sentencia debidamente ejecutoriada, manifestando que a la fecha de interposición de la demanda el Ingeniero Fabio Humberto Arango no ha cancelado la obligación.

El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales. En cuanto a los primeros, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:⁴

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

³ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

⁴ Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos⁵:

“El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso lo que es “claro, patente, especificado”,⁶ conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.⁷ Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.

3.3 CADUCIDAD:

En el presente asunto, la **acción ejecutiva se encuentra vigente**, pues se interpuso dentro del término señalado en el artículo 164, literal K) del CPACA., toda vez que la sentencia de segunda instancia del 21 de noviembre de 2017 proferida por el Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el 12 de enero de 2018, y la demanda ejecutiva se presentó el 29 de julio de 2019, es decir, dentro de los cinco (5) años de que trata la norma en cita.

3.4 CASO CONCRETO:

En el presente asunto, la ejecución que se pretende encuentra su causa jurídica en la Sentencia del 21 de mayo de 2010⁸ proferida por esta Corporación, fallo que fue modificado parcialmente por el Consejo de Estado mediante sentencia del 21

la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

⁵ Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

⁶ Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

⁷ Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.

⁸ Ver folios 3 a 22

de noviembre de 2017⁹ en el sentido que declaró administrativamente responsable a Aguas de Buga S.A. E.S.P. en concurrencia con el contratista Fabio Humberto Arango por la muerte del señor Robinson Mesa Torres.

Al analizar el título ejecutivo, se observa que en este caso concreto la obligación que emana contra el ingeniero, es sometida a una condición, ya que la misma ordenó: al *ingeniero Fabio Humberto Arango Osorio* **a restituir** a agua de Buga S.A. E.S.P. el pago de sesenta por ciento (60%) de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes; como se trata entonces de una condición implícita que trae el título ejecutivo, la parte ejecutante debe demostrar el cumplimiento de la misma para que el título sea exigible, ya que deben aparecer todos los elementos inequívocamente señalados, sin que exista duda acerca de si la situación se dio o no, es decir ejecutable cuando se cumpla la condición implícita.

En este caso resulta que el título ejecutivo es simple¹⁰, sin embargo, sometido a una obligación condicional y en ese sentido, para que el título lograra exigibilidad debió aportarse los documentos que acrediten que se trata de una restitución, esto es, que se pago por parte del ejecutante las cantidades señaladas en la sentencia, aspecto que no se aportó al proceso, por ello, no se acreditó los elementos necesarios de exigibilidad suficiente para librar mandamiento de pago; en este escenario es preciso aclarar que, no es posible inadmitir por esta razón toda vez que no se trata de un requisito de la demanda si no del título ejecutivo, por lo que la decisión debe ser **NO** librar el mandamiento de pago.

En consecuencia, se;

RESUELVE

PRIMERO: NO LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. quien obra a través de apoderado judicial en contra de FABIO HUMBERTO ARANGO OSORIO, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado ANDRES FELIPE VELASQUEZ BETANCOURT, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.115.078.088 de Buga y portador de la Tarjeta Profesional No. 370.070 del C.S.J, para actuar dentro de la acción ejecutiva en nombre y representación de la parte demandante, en el término del poder¹¹ a él conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

⁹ Ver folios 23 a 58

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de dos (2) de abril de 2014, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, expediente No. 11001032500020140030200 "Por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. En el último caso, la acción ejecutiva se promueve porque la sentencia del juez no fue cumplida. (...)".

¹¹ Folio 2

VoBoSecretario
Ngg

Radicación
Medio de control
Ejecutante
Ejecutado

: 76001-23-33-000-2019-00651-00
: EJECUTIVO
: AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.
: FABIO HUMBERTO ARANGO OSORIO



JHON ERICK CHAVES BRAVO
Magistrado



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME.
Magistrado.